

Comentarios al trabajo de Adolfo Meisel, “¿Por qué se necesita una política económica regional en Colombia?”

Haroldo Calvo Stevenson*

**Taller del Caribe Colombiano
Barranquilla, noviembre 1 de 2007**

Quiero agradecerles muy especialmente al Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República, al Observatorio del Caribe Colombiano y a Fundesarrollo por la obligante invitación que me hicieron para participar en este importante foro regional. Para quienes nos interesamos por vocación en los problemas socioeconómicos de nuestra Costa Caribe siempre es un grato deber aportar ideas en ejercicios de reflexión colectiva como el que nos congrega a partir de hoy.

Me corresponde hacer unos comentarios a la presentación de Adolfo Meisel sobre “¿Por qué se necesita una política económica regional en Colombia?”. Con argumentación contundente, Meisel le da en su ensayo un nuevo giro y aliento a un tema recurrente en sus trabajos de investigación: el rezago de la Costa Caribe colombiana y las políticas para reducirlo. Desde hace muchos años él ha sido un protagonista principal del esfuerzo que han hecho diversos analistas e instituciones por comprender y valorar – por sacar a la luz pública – las distintas dimensiones de nuestra persistente pobreza relativa en el concierto nacional.

Siguiendo la tradición iniciada por la Liga Costeña en 1919 que evoca Meisel en su escrito, la Costa Caribe acumuló durante el siglo XX, en forma paralela a la ampliación de su rezago, una señalada tradición reclamista frente al interior andino. Los Foros de la Costa, iniciados en la década de 1980 y concebidos como un frente regional común, marcaron también un hito. Desafortunadamente, no se prolongaron en el tiempo. Constituyeron, sí, a pesar de no contarse entonces con

* Profesor de Economía, Universidad del Norte

la evidencia analítica de que hoy disponemos, las primeras instancias en que, con la participación de académicos, empresarios y políticos, se hizo un examen técnico del atraso relativo de la Región Caribe. Con ello se creó un precedente en la conciencia colectiva y, desde entonces, distintas entidades y personas han contribuido desde diversas perspectivas al diagnóstico y a la discusión del que, de lejos, es el principal problema de nuestra región. Por eso, hoy es justo reconocer la iniciativa de las tres instituciones organizadoras de este encuentro, de perseverar en mantener viva la llama del amplio debate público sobre el rezago de la Costa, al organizar desde el año pasado el esfuerzo más ambicioso que ha hecho la región por fortalecer esa conciencia de su atraso relativo y para actuar sobre él.

El argumento básico del escrito de Adolfo Meisel es que el creciente rezago en varios órdenes de la Región Caribe – y también de las zonas deprimidas del Pacífico y del Caribe Antioqueño – se originó en el desigual desarrollo económico que desató en el país el auge de la economía cafetera desde principios del siglo XX – un auge que no solo generó prosperidad en el interior sino que, además, perjudicó las posibilidades de progreso de la Costa Caribe. Nunca, sin embargo, ha habido en Colombia una política pública explícita para corregir las disparidades regionales. Por el contrario, la evidencia indica que, globalmente, el gasto público en las regiones estaría contribuyendo a acentuarlas.

El conjunto de indicadores de pobreza y marginalidad que presenta el trabajo de Meisel no puede ser más revelador o más dramático. Esa periferia costera pacífica y caribe, que tiene poco más del 30% de la población nacional, contribuye desproporcionadamente a elevar los distintos indicadores de pobreza del país. De las cifras presentadas se desprende, además, que en la sola Costa Caribe, que tiene el 21.2% de la población nacional, habita el 38% de los colombianos con Necesidades Básicas Insatisfechas, el 31% de los niños desnutridos menores de 5 años, el 43% de los adultos analfabetas y el 34% de los indígenas y afro descendientes, grupos vulnerables, como lo recuerda el autor, por haber sido, históricamente, víctimas de distintas formas de discriminación.

Los desequilibrios mismos en el patrón de crecimiento a largo plazo de la economía colombiana han generado ventajas dinámicas en las zonas más prósperas. Así las

cosas, el solo crecimiento sostenido de la economía como un todo va a seguir generando mayor crecimiento relativo en las regiones más prósperas y, por consiguiente, mayores disparidades regionales. El Estado, en consecuencia, debe intervenir por razones prácticas y morales. La desigualdad inhibe el crecimiento económico, se correlaciona con la violencia y la inseguridad, fomenta externalidades negativas en la forma de congestión urbana al propiciar el surgimiento de pocos polos de crecimiento, resquebraja el consenso ciudadano en torno a las instituciones y se riñe con la posibilidad – explícita en la Constitución de Colombia – de forjar una sociedad justa.

El trabajo termina proponiendo una estrategia nacional consistente en cinco acciones de aliento contra la pobreza que puntualmente incorpora elementos que reconocen la dimensión espacial-regional del problema:

1. Una política de Estado de largo plazo.
2. Una política de fomento al crecimiento en zonas rezagadas.
3. Inversión focalizada en salud, educación y nutrición.
4. Introducción de un componente espacial en la estrategia, en reconocimiento del hecho de que la pobreza es característica de regiones específicas.
5. Creación de un fondo de compensación interregional.

Me he detenido a repasar someramente los argumentos de Adolfo Meisel para manifestar, en primer lugar, que difícilmente puedo estar en desacuerdo con su diagnóstico y con sus propuestas. En lo que sigue, quiero presentarles, con referencia a la Costa Caribe, unas breves reflexiones sobre aspectos puntuales de sus planteamientos y luego sobre sus implicaciones en términos de un marco de acción.

Un primer punto es que, cuando hablamos de la intervención del Estado para mitigar las disparidades regionales, no debemos olvidar la responsabilidad local en la solución del problema. El grueso de la propuesta del ensayo de Meisel es un llamado al Gobierno Central a canalizar más recursos focalizados a las regiones más pobres del país. Sin embargo, dentro de esa estrategia es imperativo que los gobiernos de la región cumplan un papel clave en al menos dos frentes.

El primero es mejorar la calidad de la administración pública, que es un condicionante fundamental del entorno de los negocios y de la economía en general. Nos hemos acostumbrado a que la actividad económica de nuestras urbes crece con el tiempo a pesar de malos gobiernos – Cartagena, mi ciudad, es un ejemplo elocuente de ello desde hace muchos años. Pero ese estado de cosas, ese lastre, debe erradicarse si queremos crear las condiciones para una verdadera prosperidad que eleve el bienestar de todos los estratos de la población. El desgreño administrativo, la venalidad y el clientelismo representan un enorme costo para la comunidad en términos de desperdicio de recursos, deslegitimación de la autoridad, suboferta de bienes públicos, desempleo y pobreza. Pero, además, algo que con frecuencia olvidamos es que el mal ejemplo de nuestros gobernantes y figuras públicas inhibe la formación de capital social al fomentar una mentalidad colectiva cínica y derrotista frente a las posibilidades de progreso personal.

El otro frente de responsabilidad local es la educación – la calidad del capital humano – de seguro el principal obstáculo al desarrollo de la Costa Caribe. La buena educación es un determinante básico del nivel de bienestar material y de la calidad de vida. Y, sin embargo, nos cabe a todos la responsabilidad histórica de haber descuidado este elemento clave. Ilustro el punto con un ejemplo que hallé hace poco y que me parece alarmante. En Cartagena, casi el 90% de los colegios oficiales – que son los planteles que atienden a la población de estratos bajos – están clasificados como de rendimiento Medio, Bajo o Inferior, según las pruebas del ICFES. Esto quiere decir que los alumnos allí matriculados acusan serias deficiencias cognitivas y de comprensión de lectura. En otras palabras, desde muy pequeños, la sociedad les está negando a la mayoría de sus niños y adolescentes la posibilidad de construir vidas fructíferas y plenas como adultos. Para decirlo sin ambages, sin una revolución educativa la Costa Caribe no saldrá de su atraso.

De otra parte, los planteamientos de Adolfo Meisel tienen una implicación evidente: el reto que tenemos que asumir los distintos estamentos de la región de ayudar a generar la voluntad política para que la convergencia regional se convierta en un propósito de Estado, tanto a nivel central como regional. El problema de las disparidades regionales en Colombia no estriba en la falta de

claridad o de contundencia del diagnóstico. Estriba, por el contrario, en la falta de acción estatal dirigida a mitigar los factores causantes del atraso.

A principios de los años noventa, a raíz de nuevos enfoques metodológicos que aparecieron en la literatura internacional, se comenzó a estudiar sobre bases cuantitativas más sólidas el problema de las disparidades regionales en Colombia. La evidencia de muchos estudios hechos desde entonces indica en forma clarísima que el desequilibrio socioeconómico entre la Costa Caribe y el resto del país es enorme y que se ha agudizado y continúa agudizándose por lo menos desde hace dos décadas. En una reciente revisión de la literatura sobre el tema, elaborado por la economista Katherine Aguirre, se concluye que la totalidad – salvo uno muy criticado – de los 18 trabajos principales sobre Colombia realizados en los últimos 15 años muestran que en el país ha tenido lugar durante mucho tiempo un claro proceso de creciente divergencia regional.¹

Con estos antecedentes, forzoso es formularse una pregunta: ¿Por qué el Estado colombiano nunca ha articulado y puesto en práctica una política para reducir las disparidades regionales? Me aventuro a ofrecer dos respuestas a este interrogante. En primer lugar, no es un accidente que Colombia no ha tenido una tradición sólida en la fijación de políticas que en forma explícita impulsen a unas regiones sobre otras. Como país, quizás debido al aislamiento geográfico y demográfico, tenemos un largo historial de vivas fricciones regionalistas que han dificultado enormemente la fijación de prioridades de un Estado central. Desde los albores de la República y a lo largo del siglo XIX fue este, por supuesto, el principal factor de desestabilización política del país y el detonante de más de una guerra civil. Hoy, en una nación menos pobre, la presencia latente del problema no es tan obvia y sus efectos no son tan dramáticos, pero se traducen en el riesgo de incurrir en un enorme costo político para el gobernante que se atreva a alterar radicalmente el consenso tácito del equilibrado tratamiento de las regiones. Es ese el paradigma que debe superarse – que debe la Costa Caribe pugnar por superar – para que en Colombia sea, como se estila decir hoy, “políticamente correcto” ayudar a algunas

¹ Katherine Aguirre, “¿Se ha ampliado la brecha entre las regiones de Colombia? Un repaso de la literatura sobre convergencia económica”, en www.webpondo.org [consultado el 26 de octubre de 2007]

regiones con asignaciones presupuestales en cuya distribución todas puján por maximizar su tajada.

Mi segunda respuesta tiene que ver con nosotros mismos y con la estrategia de imponer ese nuevo paradigma: No será posible impulsar una política de Estado para buscar la convergencia de nuestra región con el interior mientras en la Costa Caribe no sepamos convertir esa meta en un verdadero propósito colectivo. El rezago de la Costa Caribe y las estrategias para frenarlo nunca serán tema de preocupación, nunca serán un problema nacional, mientras no sean un gran propósito regional, mientras no se conviertan en una bandera de nuestra propia dirigencia – la bancada costeña en el Congreso, los gobernadores y los alcaldes, los gremios y asociaciones, las universidades – todos unidos en ese propósito de darle legitimidad política.

Los Foros de la Costa de los años ochenta y noventa eventualmente cesaron quizás porque sus propósitos se fueron desdibujando con el tiempo. Ese es un error que no podemos repetir. Hoy, a comienzos del siglo XXI, tomemos ejemplo de los bríos reclamistas que, sobre bases más endeblés pero como una sola voz, exhibieron nuestros antepasados con la conformación de la Liga Costeña hace noventa años. De seguro, por esa época el problema del atraso relativo de la Costa Caribe era mucho menos evidente de lo que es a principios del siglo XXI. En ese entonces, además, apenas comenzaba a vislumbrarse en el país la posibilidad de un progreso económico sostenido en el tiempo – algo que hoy damos por sentado luego de un siglo de industrialización y urbanización.

A pesar de ello, la Costa Caribe es hoy un ente regional poco integrado en torno a unos intereses económicos, políticos y culturales comunes, a pesar de que los conocemos de sobra, pues están nítidamente definidos. Afortunadamente pertenecen a nuestra prehistoria las parroquiales rencillas intestinas que debilitaban nuestra voz colectiva. Vistos a distancia, tienen un tinte pintoresco episodios como las Jornadas de Abril, en 1944, cuando Cartagena se levantó en protesta porque la Escuela de Grumetes iba a ser trasladada a Barranquilla o, en los años cincuenta, cuando las dos ciudades se trenzaron en un forcejeo por la

administración de los peajes de una vía irónicamente bautizada como Carretera de la Cordialidad.

Trabajémosle, entonces, a hacer de estos intereses comunes nuestra fortaleza para luchar por la idea de que la convergencia de la Costa Caribe con las regiones prósperas del país no es solo el medio para sacar a sus propios habitantes de la pobreza y el marginamiento. Una Costa Caribe próspera es, como lo sostiene el ensayo de Adolfo Meisel, un imperativo económico, político y moral para Colombia como un todo.